

## EL RECUADRO

Las pasadas elecciones andaluzas abrieron en España un año de intensa actividad electoral que pasa por los comicios municipales y autonómicos del presente mes mayo, unas elecciones catalanas que quizá se produzcan a finales de septiembre y las generales que cerrarán el ciclo y cuya fecha, más difícil de precisar, podría estar entre septiembre y enero.

Esta sobreactividad electoral que no necesariamente significa toma de decisiones políticas de calado, coincide con un momento económico especialmente sensible en el país que va a determinar nuestro futuro económico, al menos a corto y medio plazo.

La salida de la crisis global que ha tenido especial virulencia en España y que, si bien parece confirmarse al menos a nivel macroeconómico, está lejos de ser sólida a nivel microeconómico, no está generando todavía la confianza necesaria para apuntalar una recuperación generalizada de la actividad, la inversión, el consumo y el empleo.

Los próximos gobiernos que salgan de las urnas, autonómicos, locales y, finalmente, el central –los tres escalones de nuestra administración– tendrán que aplicar, desde el primer momento y con convicción, políticas reformistas valientes que permitan recuperar esa confianza en el futuro de nuestra economía, para asegurar la sostenibilidad de nuestra deuda exterior y favorecer nuestra competitividad.

Pero esas políticas que debe definirse en las urnas tampoco pueden, en lo sustancial abandonarse en la inacción, la timidez o la parcialidad, durante meses por simples cálculos electorales que, lejos de solucionar problemas, han servido en las más de las ocasiones para agravarlos.

Cualquiera que sea el planteamiento político que se quiera hacer, España necesita que el incipiente crecimiento del PIB se convierta en firme y sostenido, reducir el déficit y generar empleo. Y esas metas sólo tienen un camino, el que discurre entre el ajuste fiscal y el incremento de la competitividad que se apoye en una economía realmente productiva, innovadora y capaz de exportar productos y servicios a todo el mundo.

El ajuste fiscal, una vez agotadas las posibilidades de mayores exacciones que las sufridas, ha de hacerse por el lado del gasto, fundamentalmente del gasto corriente, ganando en eficiencia y sencillez en un sector público con competencias solapadas entre distintas administraciones y sin capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias económicas.

En paralelo, desde todas las administraciones deben concretarse medidas favorecedoras de la competitividad de las empresas, especialmente la de las pymes, y estímulos al ahorro, la inversión y la creación de empleo.

Ninguna política, ni reforma debería aplicarse sin cumplir estas premisas, y definir programas electorales alejados de ellas podría revertir el incipiente punto de inflexión de la economía y provocar un cambio de tendencia casi suicida.

La economía española no puede redefinir sus grandes líneas de actuación antes, durante, y después de cada ciclo electoral. Los ejes que deben soportar el peso de la política económica del país deben ser sólidos y consistentes, porque, lejos de oscilaciones coyunturales, siguen siendo imprescindibles medidas de modernización de nuestras estructuras económicas y sociales en todos los ámbitos.

Por muchas campañas electorales que tengan lugar, por muchas elecciones que se celebren, por más que se debata, la actividad económica y empresarial, de la que depende la viabilidad de nuestra economía y de nuestro modelo social, necesita un entorno normativo sencillo estable y previsible para las empresas, que favorezca la innovación y la competitividad, y una verdadera coordinación legislativa entre Estado, Comunidades Autónomas y Entes Locales. En todo ello caben pocos errores más.